



**TRATADO SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS
Y MENORES BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA**

La República del Perú y la República Italiana,

Deseando facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas mediante la adopción de métodos adecuados;

Considerando que deben lograrse estos objetivos dándoles a los extranjeros privados de su libertad, como consecuencia de una sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen;

Han convenido celebrar el siguiente Tratado sobre Transferencia de Personas Condenadas y Menores bajo Tratamiento Especial.

**ARTICULO 1
DEFINICIONES**

A efectos del presente Tratado:

- 1) "SENTENCIA", designará una resolución o fallo final dictado por un órgano judicial con el cual termina el proceso penal y se impone una condena;
- 2) "PERSONA CONDENADA", designará a una persona que esté cumpliendo una condena consentida o ejecutoriada, es decir, no sujeta a posterior impugnación;
- 3) "ESTADO RECEPTOR", designará al Estado al cual la persona condenada puede ser transferida o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena;
- 4) "ESTADO TRASLADANTE", designará al Estado que haya impuesto una condena y del cual la persona condenada pueda ser transferida o lo haya sido ya;
- 5) "CONDENA", designará cualquier pena o medida privativa de libertad por cumplirse en un establecimiento penal, hospital u otra institución en el Estado trasladante, que se haya dictado por un órgano judicial, con una duración limitada o indeterminada, por razón de una infracción penal, y;
- 6) "MENORES BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL", designará a una persona menor de edad que esté cumpliendo una medida privativa de libertad impuesta por una resolución judicial firme por la comisión de un hecho tipificado como delito en la ley penal.

**ARTICULO 2
PRINCIPIOS GENERALES**

1. Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el presente Tratado, a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de transferencia de personas condenadas.

2. Una persona condenada en el territorio de una de las Partes podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Tratado, ser transferida al territorio de la otra Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. Con tal fin, podrá expresar, bien al Estado trasladante o bien al Estado receptor, su deseo de que se le transfiera en virtud del presente Tratado.

3. La transferencia podrá ser solicitada por el Estado trasladante o por el Estado receptor.

ARTICULO 3 CONDICIONES PARA LA TRANSFERENCIA

El presente Tratado se aplicará bajo las siguientes condiciones:

1. Que la persona condenada sea nacional del Estado receptor.
2. Que la persona sentenciada no haya sido condenada por delitos exclusivamente militares o por delitos políticos o los hechos conexos a ellos.
3. Que la Parte de la condena de la persona condenada que quede por cumplirse en el momento de recibirse la solicitud sea por lo menos de seis meses o indeterminada, salvo razones excepcionales.
4. Que la sentencia sea firme o definitiva y que no queden pendientes procedimientos extraordinarios de revisión en el momento de invocar las disposiciones del Tratado.
5. Que la persona condenada, o una persona autorizada a actuar en su nombre, cuando por razón de su edad o de su estado físico o mental, uno de los Estados así lo estimare necesario, consienta la transferencia.
6. Que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyan una infracción penal con arreglo a la ley del Estado receptor, o lo constituyeran si se cometieran en su territorio.
7. Que la persona condenada haya cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del Estado trasladante, de las multas, gastos de justicia, reparación civil y condenas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia condenatoria. Se exceptúa a la persona condenada que acredite debidamente su absoluta insolvencia.
8. Que el Estado trasladante y el Estado receptor manifiesten expresamente su acuerdo con la transferencia.
9. Que se haya conmutado una eventual pena de muerte.

ARTICULO 4 AUTORIDADES COMPETENTES

Las Partes designarán a las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Tratado.

ARTICULO 5 OBLIGACION DE FACILITAR INFORMACIONES

1. Los Estados Partes se comprometen a poner el presente Tratado en conocimiento de cualquier persona condenada a quien pudiera aplicársele.

2. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado trasladante su deseo de ser transferido en virtud del presente Tratado, dicho Estado deberá informar de ello al Estado receptor con la mayor diligencia posible después que la sentencia sea firme.

3. Las informaciones comprenderán:

- a. El nombre y apellidos, el lugar y la fecha de nacimiento de la persona condenada;
- b. En su caso, su dirección en el Estado receptor;
- c. Una exposición de los hechos que hayan originado la condena;
- d. La naturaleza, la duración y la fecha del inicio de la condena; y
- e. Cualquier otra información que el Estado receptor pueda requerir y, en todo caso, para permitirle considerar la posibilidad de transferencia, así como para informar a la persona condenada y al Estado trasladante de las consecuencias de la transferencia para la persona condenada según su ley.

4. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado receptor su deseo de ser transferida, el Estado trasladante comunicará a dicho Estado, a petición de Parte, las informaciones a que se refiere el numeral 3 del presente artículo.

5. Deberá informarse por escrito a la persona condenada de cualquier gestión emprendida por el Estado trasladante o el Estado receptor en aplicación de los numerales precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados respecto a una petición de transferencia.

6. El Estado trasladante suministrará al Estado receptor una copia certificada de la sentencia relativa a la persona condenada, haciendo constar que ha quedado firme. Si el Estado receptor considera que tal información es insuficiente, podrá solicitar las principales partes de las actas del juicio u otra información que estime necesaria. Los documentos que se entreguen de Estado a Estado en aplicación del presente Tratado estarán exentos de las formalidades de legalización.

ARTICULO 6

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

1. Cada traslado de personas italianas condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República Italiana en la República del Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. Cada traslado de personas peruanas condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República del Perú en la República Italiana al Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Si el Estado trasladante considera la petición de traslado de la persona condenada, y expresa su consentimiento, el Estado trasladante comunicará lo antes posible al Estado receptor su aprobación de tal solicitud, de modo que una vez que se hayan completado los arreglos internos se pueda efectuar el traslado.
4. La entrega de la persona condenada por las autoridades del Estado trasladante a las del Estado receptor se hará en el lugar que convengan ambas Partes. El Estado receptor será responsable de la custodia de la persona condenada y de su transporte desde el Estado trasladante. Dicha entrega constará en una acta.
5. Para tomar la decisión relativa al traslado de una persona condenada y de conformidad con el objeto de que el traslado contribuya positivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará, entre otros factores, la gravedad del delito y las posibles vinculaciones del autor con el crimen organizado, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con la sociedad del Estado trasladante y del Estado receptor.
6. Cuando cualquiera de los dos Estados no apruebe la transferencia de una persona condenada, notificará su decisión sin demora al otro Estado, expresando la causa motivo de la denegatoria.
7. Antes de efectuarse el traslado, el Estado trasladante brindará al Estado receptor, si éste lo solicitara, la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado por vía diplomática por el Estado receptor de acuerdo a sus leyes, que el consentimiento de la persona condenada fue dado de manera voluntaria y con el pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes al mismo.
8. Los gastos ocasionados al aplicarse el presente Tratado, correrán a cargo del Estado receptor. Sin embargo, éste podrá intentar lograr que la persona condenada devuelva la totalidad o parte de los gastos de transferencia.

ARTICULO 7

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

1. El Estado receptor, a petición del Estado trasladante, facilitará los documentos siguientes:
 - a. Una copia de las disposiciones legales pertinentes del Estado receptor de las cuales resulta que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado trasladante constituyen una infracción penal con arreglo al derecho del Estado receptor o la constituirían si se cometieran en su territorio;

b. Una declaración del efecto, con respecto a la persona condenada, de cualquier ley o reglamento relativo a su detención en el Estado receptor después de su transferencia.

2. Si se solicitara una transferencia, el Estado trasladante deberá facilitar al Estado receptor los documentos que a continuación se expresan, a menos que uno u otro de los dos Estados hayan indicado su desacuerdo con la transferencia:

- a. Una copia de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;
- b. La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de la pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena y los eventuales beneficios penitenciarios;
- c. Una declaración en la que conste el consentimiento para la transferencia a que se refiere al numeral 5 del artículo 3; y
- d. Cuando proceda cualquier informe médico o social acerca de la persona condenada, cualquier información sobre su tratamiento en el Estado trasladante y cualquier recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado receptor.

3. La solicitud y los documentos que se entreguen por cualquiera de los Estados en aplicación del presente Tratado serán eximidos de las formalidades de legalización y remitidos en el idioma del Estado que los envía.

ARTICULO 8 INFORMACION ACERCA DEL CUMPLIMIENTO

El Estado receptor facilitará información al Estado trasladante acerca del cumplimiento de la condena:

- a. Cuando se haya cumplido la condena;
- b. Si la persona condenada se evadiera; o
- c. Si el Estado trasladante solicitara información adicional.

ARTICULO 9 PROHIBICION DE NUEVO PROCESO O MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD CONTRA LA PERSONA TRASLADADA

Una persona condenada entregada para el cumplimiento de una condena en virtud del presente Tratado no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado trasladante.

ARTICULO 10 JURISDICCION

1. El Estado trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. El Estado trasladante retendrá asimismo la facultad de indultar o conceder amnistía o clemencia a la persona condenada. El Estado receptor al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

2. En ningún caso puede modificarse por su naturaleza y/o por su duración la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado trasladante. La ejecución de la pena de la persona condenada trasladada se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado receptor incluidos los beneficios que contempla su legislación y los otorgados por el Estado trasladante.

3. La pena total que el condenado deberá cumplir no podrá ser, por su naturaleza y/o por su duración, más grave que la sanción impuesta en el Estado trasladante, ni podrá superar el máximo previsto para aquel hecho por la ley del Estado receptor, sin perjuicio de lo previsto en el punto 6 del artículo 6.

ARTICULO 11 APLICABILIDAD A MENORES BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL

El presente Tratado se aplicará a menores bajo tratamiento especial conforme a las leyes de las Partes. La ejecución de la medida privativa de libertad que se aplique a tales menores de edad se cumplirá de acuerdo a las leyes del Estado receptor. Para el traslado se deberá obtener el consentimiento expreso del representante legal del menor.

ARTICULO 12 FACILIDADES DE TRANSITO

1. Si cualquiera de los Estados celebrara un Tratado para la transferencia de personas condenadas con un tercer Estado, el otro Estado deberá colaborar facilitando el tránsito por su territorio de las personas condenadas en virtud de dicho Tratado.

2. El Estado que tenga intención de efectuar tal transferencia deberá dar aviso previo de la transferencia de las personas condenadas al otro Estado.

ARTICULO 13 APLICACION TEMPORAL

El presente Tratado podrá aplicarse al cumplimiento de condenas dictadas ya sea antes o después de su entrada en vigor.

ARTICULO 14
PROSECUCION DEL CUMPLIMIENTO

Con el objeto de cumplir con los propósitos del presente Tratado, cada una de las Partes adoptará las medidas legislativas necesarias y establecerá los procedimientos administrativos adecuados para que la sentencia, con pena privativa de la libertad y medidas de seguridad privativas de la libertad impuestas por el Estado trasladante, tenga efecto legal en el Estado receptor.

ARTICULO 15
CESACION DEL CUMPLIMIENTO

El Estado receptor deberá poner fin al cumplimiento de la condena en cuanto le haya informado el Estado trasladante de cualquier decisión o medida que la ponga fin.

ARTICULO 16
VIGENCIA DEL TRATADO


1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha del canje de los instrumentos de ratificación. Dicho canje tendrá lugar en la ciudad de Lima.

2. El presente Tratado permanecerá en vigor por cinco años y se renovará automáticamente por períodos sucesivos de cinco años, a menos que una de las Partes notifique formalmente por escrito a la otra Parte su intención de dar por terminado el Tratado, por lo menos seis meses antes de la expiración del término.


En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados a tal efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Tratado.

Hecho en Roma, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y cuatro, en doble original en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno
de la República del Perú


Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro de Justicia

Por el Gobierno
de la República Italiana


Hon. Alfredo Biondi
Ministro de Gracia y Justicia

**TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE
E DI MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

La Repubblica del Perù e la Repubblica Italiana,

Desiderando facilitare il reinserimento sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati,

Considerando che questi obiettivi devono essere raggiunti dando ai cittadini stranieri, privati della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la condanna loro inflitta nel proprio ambiente sociale di origine;

Hanno convenuto il seguente Trattato sul Trasferimento di Persone Condannate e Minori in Trattamento Speciale.

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente Trattato:

- 1) "SENTENZA", indica una decisione o giudizio definitivo emesso da un organo giudiziario con il quale termina il processo penale e si infligge una condanna;
- 2) "PERSONA CONDANNATA", indica una persona che stia scontando una condanna definitiva, cioè non soggetta ad ulteriore impugnazione;
- 3) "STATO RICEVENTE", indica lo Stato dove la persona condannata può essere trasferita o già lo sia stata, al fine di scontare la sua condanna;
- 4) "STATO TRASFERENTE", indica lo Stato che abbia inflitto una condanna e dal quale la persona condannata possa essere trasferita o già lo sia stata;
- 5) "CONDANNA", indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà, da scontare in un istituto penitenziario, ospedale o altra istituzione dello Stato trasferente, che sia stata emessa da un organo giudiziario, con durata limitata o illimitata, a motivo di un reato;
- 6) "MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE", indica una persona minore di età che stia scontando una misura privativa della libertà inflitta con una decisione giudiziaria definitiva per aver commesso un fatto che l'ordinamento penale qualifica come reato.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti si impegnano, alle condizioni previste dal presente Trattato, a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione possibile in materia di trasferimento di persone condannate.

2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti può, avvalendosi di quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte per scontare la condanna che le sia stata inflitta. A tal fine, detta persona può manifestare il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato sia allo Stato trasferente che allo Stato ricevente.

3. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente.

ARTICOLO 3 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Il presente Trattato si applica alle seguenti condizioni:

1. Che la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato ricevente.
2. Che la persona non sia stata condannata per reati esclusivamente militari o per reati politici o per fatti ad essi connessi.
3. Che la pena residua da scontare da parte della persona condannata sia, al momento in cui viene ricevuta la richiesta, di almeno sei mesi, ovvero indeterminata, salvo casi eccezionali.
4. Che la sentenza sia esecutoria o definitiva e che non rimangano in sospeso procedimenti straordinari di revisione nel momento in cui vengono invocate le disposizioni del presente Trattato.
5. Che la persona condannata, ovvero la persona autorizzata ad agire per suo conto qualora per ragioni di età o del suo stato fisico o mentale uno degli Stati lo ritenesse necessario, acconsenta al trasferimento.
6. Che gli atti od omissioni che abbiano motivato la condanna costituiscano un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o lo costituirebbero se fossero commessi nel suo territorio.
7. Che la persona condannata abbia pagato, o garantito il pagamento a soddisfazione dello Stato trasferente, le pene pecuniarie, le spese giudiziarie, il risarcimento civile e le sanzioni pecuniarie di qualsiasi genere che sono a suo carico, in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna. Viene fatta eccezione per la persona condannata che debitamente documenti la propria assoluta insolvenza.
8. Che lo Stato trasferente e lo Stato ricevente manifestino espressamente il proprio consenso al trasferimento.

9. Che sia stata commutata una eventuale pena di morte.

ARTICOLO 4 AUTORITA' COMPETENTI

Le Parti provvederanno a designare le autorità incaricate di adempiere alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 5 OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. Gli Stati Parte si impegnano a portare il presente Trattato a conoscenza di qualsiasi persona condannata cui lo stesso possa essere applicato.

2. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato trasferente il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Trattato, detto Stato deve informarne lo Stato ricevente con la massima sollecitudine possibile dopo che la sentenza sia definitiva.

3. Le informazioni comprenderanno:

- a) il nome e i cognomi, il luogo e la data di nascita della persona condannata;
- b) il suo eventuale indirizzo nello Stato ricevente;
- c) un'esposizione dei fatti che hanno determinato la condanna;
- d) la natura, la durata e la data d'inizio della condanna;
- e) qualsiasi altra informazione che lo Stato ricevente possa richiedere e che gli consenta, comunque, di valutare la possibilità del trasferimento e di rendere edotta la persona condannata e lo Stato trasferente circa le conseguenze del trasferimento per la persona condannata secondo la propria legge.

4. Se la persona condannata ha manifestato allo Stato ricevente il proprio desiderio di essere trasferita, lo Stato trasferente deve comunicare all'altro Stato, su richiesta di parte, le informazioni di cui al punto 3 del presente articolo.

5. La persona condannata deve essere informata per iscritto circa qualsiasi procedimento avanzato dallo Stato trasferente o dallo Stato ricevente in applicazione dei punti precedenti, così come di qualsiasi decisione adottata da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.

6. Lo stato trasferente deve fornire allo Stato ricevente una copia autentica della sentenza relativa alla persona condannata, sottolineandone il carattere definitivo. Se lo Stato ricevente ritiene che tali informazioni sono insufficienti, può richiedere le parti principali degli atti del procedimento o qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria. I documenti che si scambiano da Stato a Stato, in applicazione del presente Trattato, saranno esenti dalle formalità di legalizzazione.

ARTICOLO 6 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

1. Qualsiasi trasferimento di persone italiane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica del Perù al Ministero degli Affari Esteri.

2. Qualsiasi trasferimento di persone peruviane condannate viene avviato tramite una richiesta formulata per iscritto e presentata dall'Ambasciata della Repubblica del Perù nella Repubblica Italiana al Ministero degli Affari Esteri.

3. Se lo Stato trasferente considera valida la domanda di trasferimento della persona condannata, ed esprime il suo consenso, lo Stato trasferente provvede a comunicare allo Stato ricevente la propria approvazione, in modo che, una volta espletati gli accordi interni, si possa dar corso al trasferimento.

4. La consegna della persona condannata da parte delle autorità dello Stato trasferente a quelle dello Stato ricevente avviene nel luogo convenuto da ambedue le Parti. Lo Stato ricevente è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato trasferente. Viene redatto apposito processo verbale attestante l'avvenuta consegna.

5. Per adottare la decisione relativa al trasferimento di una persona condannata ed allo scopo di assicurare che il trasferimento contribuisca positivamente al suo reinserimento sociale, le autorità di ciascuna delle Parti devono considerare, tra gli altri fattori, la gravità del reato e gli eventuali legami dell'autore con la criminalità organizzata, il suo stato di salute ed i legami sociali che questi possa avere nello Stato trasferente e nello Stato ricevente.

6. Qualora uno dei due Stati non approvi il trasferimento di una persona condannata, notifica la sua decisione, con sollecitudine, all'altro Stato, specificando la causa che ha motivato il suo rifiuto.

7. Prima di dar corso al trasferimento, lo Stato trasferente deve offrire allo Stato ricevente, se questi lo richiede, l'opportunità di verificare, tramite un funzionario designato per via diplomatica dallo Stato ricevente secondo le proprie leggi, che il consenso della persona condannata è stato espresso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

8. Le spese originarie dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato ricevente. Tuttavia, quest'ultimo può adoperarsi per ottenere che la persona condannata restituisca l'ammontare delle spese di trasferimento in misura parziale o integrale.

ARTICOLO 7 DOCUMENTAZIONE DI SOSTEGNO

1. Lo Stato ricevente, su richiesta dello Stato trasferente, deve trasmettere i seguenti documenti:

- a) una copia delle relative disposizioni di legge dello Stato ricevente dalle quali risulti che gli atti od omissioni che hanno dato luogo alla condanna nello Stato trasferente costituiscono un reato secondo la legge dello Stato ricevente, o che lo costituirebbero se fossero stati commessi nel proprio territorio;
- b) una dichiarazione degli effetti, nei confronti della persona condannata, di qualsiasi legge o regolamento concernente la sua detenzione nello Stato ricevente dopo il suo trasferimento.

2. Lo Stato trasferente che richiede il trasferimento deve inviare allo Stato ricevente i documenti di seguito specificati, a meno che uno o l'altro dei due Stati abbia espresso il proprio diniego al trasferimento:

- a) una copia della sentenza e delle disposizioni di legge applicate;
- b) l'indicazione della durata della condanna già scontata, comprendente le informazioni relative a qualsiasi detenzione preventiva, riduzione di pena od altra circostanza relativa all'esecuzione della condanna e ad eventuali benefici penitenziari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti l'assenso al trasferimento, di cui al punto 5 dell'articolo 3;
- d) quando sussista qualsiasi relazione medica o sociale riguardante la persona condannata, qualsiasi informazione circa le sue cure nello Stato trasferente e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione delle sue cure nello Stato ricevente.

3. La richiesta e i documenti consegnati da qualsiasi dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione e vengono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia.

ARTICOLO 8 INFORMAZIONI CIRCA L'ESECUZIONE

Lo Stato ricevente fornisce informazioni allo Stato trasferente circa l'esecuzione della condanna:

- a) quando sia stata scontata la pena;
- b) se la persona condannata dovesse evadere;
- c) qualora lo Stato trasferente richieda ulteriori informazioni.

ARTICOLO 9
DIVIETO DI NUOVO PROCESSO O MISURA PRIVATIVA DELLA LIBERTA'
CONTRO LA PERSONA TRASFERITA

Una persona condannata consegnata per scontare una condanna in virtù del presente Trattato, non può essere detenuta, processata o condannata nuovamente nello Stato ricevente per il reato che ha determinato la condanna inflitta dallo Stato trasferente.

ARTICOLO 10
GIURISDIZIONE

1. Lo Stato trasferente conserva giurisdizione esclusiva sulla condanna inflitta e su qualsiasi altro procedimento che disponga la revisione o modifica delle decisioni adottate dai propri organi giudiziari. Lo Stato trasferente si riserva inoltre la facoltà di condonare la pena o concedere amnistia o grazia alla persona condannata. Lo Stato ricevente, nell'apprendere qualsiasi decisione al riguardo, deve adottare con sollecitudine le misure corrispondenti conformemente alla propria legislazione in materia.

2. La pena privativa della libertà comminata dall'autorità giudiziaria dello Stato trasferente non può essere modificata, per natura o per durata, in nessun caso. L'esecuzione della pena della persona condannata trasferita deve essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi dallo Stato trasferente.

3. La pena totale che la persona condannata deve scontare non può essere più grave, per natura e/o per durata, della sanzione imposta nello Stato trasferente, né può eccedere la massima sanzione prevista per il medesimo fatto dalla legge dello Stato ricevente, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 6.

ARTICOLO 11
APPLICABILITA' A MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE

Il presente Trattato è applicabile a minori in trattamento speciale conformemente alle leggi delle Parti. L'esecuzione della misura privativa della libertà che venga applicata a tali minori di età viene effettuata conformemente alle leggi dello Stato ricevente. Per il trasferimento è necessario ottenere il consenso esplicito da parte del rappresentante legale del minore.

ARTICOLO 12
AGEVOLAZIONI DI TRANSITO

1. Se qualsiasi dei due Stati stipulasse un Trattato per il trasferimento di persone condannate con un terzo Stato, l'altro Stato deve collaborare facilitando il transito, nel proprio territorio, delle persone condannate in virtù di detto Trattato.

2. Lo Stato che ha intenzione di effettuare tale trasferimento deve dare all'altro Stato preventiva comunicazione delle persone condannate da trasferire.

ARTICOLO 13
APPLICAZIONE TEMPORALE

Il presente Trattato è applicabile nei casi di condanne inflitte sia prima, sia dopo la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 14
ESTENSIONE DEGLI EFFETTI

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Trattato, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure legislative e predisporrà le opportune procedure amministrative affinché la sentenza, che prevede la pena e le misure di sicurezza detentive stabilite dallo Stato trasferente, abbia effetto giuridico nello Stato ricevente.

ARTICOLO 15
CESSAZIONE DELLA PENA

Lo Stato ricevente deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato trasferente lo abbia informato circa qualsiasi decisione o misura che vi ponga fine.

ARTICOLO 16
VALIDITA' DEL TRATTATO

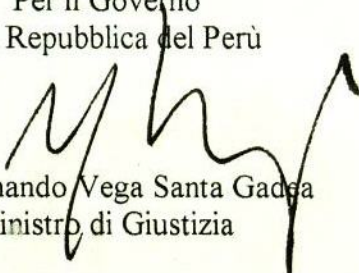
1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avrà luogo nella città di Lima.

2. Il presente Trattato resterà in vigore per cinque anni e verrà rinnovato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle Parti notifichi formalmente per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il Trattato almeno sei mesi prima della sua scadenza.

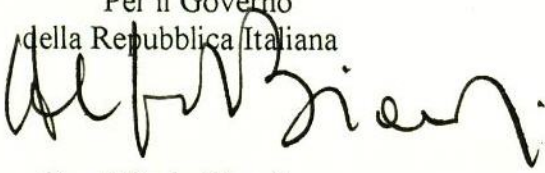
In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantaquattro in duplice originale, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica del Perù


Dr. Fernando Vega Santa Gadea
Ministro di Giustizia

Per il Governo
della Repubblica Italiana


On. Alfredo Biondi
Ministro di Grazia e Giustizia



